



FOTO: El Espectador

Pero el Gobierno empezó a obstruir. El 29 de abril, la Secretaría General remitió el acta para su suscripción, pero la ministra alegó por “solicitud de varios sectores” que cuestionaban la legalidad del proceso. Sin base jurídica, esta maniobra fue un bloqueo para impedir la posesión del rector luego de una elección válida.

Ante la arbitrariedad, Peña, amparado en la ley, se posesionó el 2 de mayo ante una Notaría, notificando a la Universidad.

Paralelamente, la Universidad sufrió un golpe: **el 8 de abril, encapuchados tomaron el Edificio Administrativo Uriel Gutiérrez, afectando a 450 trabajadores en Bogotá y 300 a nivel nacional.**

Reportes confirmaron la presencia de miembros

de la “primera línea” de Kennedy y Suba, con vehículos suministrando víveres presuntamente vinculados a políticos cercanos al gobierno. **La Personería documentó los hechos, y la Universidad suspendió clases presenciales, optando por el trabajo remoto. Las pérdidas ascienden a \$3.000 millones: infraestructura destrozada, equipos robados, cámaras y torniquetes vandalizados. El Gobierno mantuvo silencio.**

El paro general, alimentado por esta controversia, nos costó \$25.579 millones. Desglosémoslo: **\$9.000 millones en recuperación de infraestructura, \$11.142 millones en salarios de docentes ocasionales durante 60 días, \$1.337 millones en pólizas estudiantiles y \$4.000 millones en gastos por trabajo remoto.** Los contribuyentes pagan esta factura, mientras el Gobierno juega con el futuro de miles de jóvenes.

